

Sindicatos estatales y macrismo: desafíos ante la nueva coyuntura

AUTORAS: BLANCO, LAURA SILVANA- BASCUR, SILVIA ALEJANDRA

PERTENENCIA INSTITUCIONAL: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE.
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

MAIL: lau304@yahoo.com.ar- silvibascc@gmail.com

MESA TEMÁTICA: Cambiemos: relaciones, dilemas, tensiones entre el gobierno y sindicatos del sector público

DISCIPLINAS: Sociología del trabajo

PALABRAS CLAVES: Sindicatos, Estado, Conflicto

RESUMEN:

Actualmente, asistimos a la inauguración de un nuevo ciclo liberal en América Latina y la rapidez con que se esparce parece encontrar a ciertos sectores del sindicalismo no alineado con el gobierno, sin demasiadas herramientas para detener este proceso. La Alianza Cambiemos en escasos meses está logrando imponer reformas que cambian ciertos rasgos del modelo político y económico anterior, sobre todo en términos de la intervención estatal. Justamente, dismantelar el Estado sosteniendo procesos de ajuste, de caída del salario y aumentando la desocupación tanto en el sector privado como público se constituye en una característica central de este proceso. En este contexto, es que este trabajo pretende arrojar algunas reflexiones acerca del papel y los desafíos que tienen los sindicatos estatales, particularmente la CTA en este período postkirchnerista.

Para lograr dicho objetivo, en primer lugar, consideramos necesario reflexionar y analizar teóricamente el vínculo Estado-sindicatos estatales, por lo que debemos reflexionar acerca de la especificidad del sector estatal. Luego realizaremos una caracterización del modelo de acumulación de la posconvertibilidad a nivel nacional y las tensiones que se le plantean a la Central en ese marco. Por último, recuperaremos algunos aspectos relativos a la estructura socio-económica de la provincia de Río Negro y la especificidad de la Central en su vínculo con el Estado provincial.

1. INTRODUCCIÓN

Esta ponencia constituye una primera aproximación a la temática en estudio, en el marco proyecto de investigación “Estado, Territorio y Movimientos Sociales en la era de la Globalización. El caso de la Patagonia Norte”. Dicho proyecto se desarrolla en la Universidad Nacional del Comahue. Es necesario aclarar que lo que exponemos en la misma no aborda exactamente lo que habíamos planteado en el resumen enviado. Esto se debe a que, como es un primer acercamiento al objeto de estudio, la complejidad del mismo nos imposibilita un abordaje exhaustivo como el que proponíamos y al mismo tiempo, nos surgieron algunas inquietudes, sobre todo teóricas, que

deseamos dejar plasmadas en este trabajo.

Varios autores coinciden en que, a partir del nuevo ciclo político y social que se originó en 2001/2003 se produjo un proceso creciente de revitalización de las disputas laborales recuperando centralidad en la conflictividad social, las reivindicaciones sindicales. La disminución del desempleo, la reapertura de paritarias y la modificación ciertas regulaciones laborales, contribuyeron a la nueva gravitación del actor sindical en las pujas por la distribución del excedente y dieron cuenta de cierto desplazamiento de los espacios y sujetos de manifestación de la conflictividad social.

Actualmente, asistimos a la inauguración de un nuevo ciclo liberal en América Latina y la rapidez con que se esparce parece encontrar a ciertos sectores del sindicalismo no alineado con el gobierno, sin demasiadas herramientas para detener este proceso.

La Alianza Cambiemos en escasos meses está logrando imponer reformas que cambian ciertos rasgos del modelo político y económico anterior, sobre todo en términos de la intervención estatal. Justamente, dismantelar el Estado sosteniendo procesos de ajuste, de caída del salario y aumentando la desocupación tanto en el sector privado como público se constituye en una característica central de este proceso. En este contexto, es que este trabajo pretende arrojar algunas reflexiones acerca del papel y los desafíos que tienen los sindicatos estatales, particularmente la CTA en este período postkirchnerista.

Para lograr dicho objetivo, en primer lugar, consideramos necesario reflexionar y analizar teóricamente el vínculo Estado-sindicatos estatales, por lo que debemos reflexionar acerca de la especificidad del sector estatal. Luego realizaremos una caracterización del modelo de acumulación de la posconvertibilidad a nivel nacional y las tensiones que se le plantean a la Central en ese marco. Por último, recuperaremos algunos aspectos relativos a la estructura socio-económica de la provincia de Río Negro y la especificidad de la Central en su vínculo con el Estado provincial.

2. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL SINDICALISMO ESTATAL O SOBRE EL SINDICALISMO EN EL ÁMBITO DEL ESTADO.

Como podemos apreciar, la relación entre Estado y sindicatos a partir del escenario abierto en 2002 no es sencillo de describir. En lo que respecta a los sindicatos estatales, especialmente a la Central objeto de nuestro estudio, pudimos ver que el kirchnerismo planteo dilemas, tensiones que llevaron a la ruptura de la misma.

Lo que nos interesa en este apartado es, a partir del análisis de estos procesos, reflexionar sobre la

naturaleza propia del sindicalismo estatal como un campo específico de estudio. En este sentido recuperamos fundamentalmente los aportes y desarrollos teóricos de Nicolas Diana Menéndez (2007), quien trabaja las lógicas de representación en dos sindicatos estatales (UPCN y ATE), así como también los trabajos específicos sobre el sindicalismo docente de Chiappe, Ronconi y Murrillo (2002) fundamentalmente.

Como elementos analíticos de aproximación a este campo, podemos mencionar dos tensiones estructurantes del mismo: una de carácter estructural y otra de carácter político-ideológico.

Para acercarnos a la dimensión estructural recuperamos los aportes de Clauss Offe. Los sindicatos estatales, los trabajadores del Estado al no estar directamente vinculados al principio del intercambio, pueden obstruir en menor medida o con menor impacto al capital.

Esto hace que los reclamos y las luchas del sector estatal (especialmente en los ámbitos de la salud y la educación que son sectores que se encuentran bajo la órbita estatal y que están en mayor medida desmercantilizados), cobren inmediatamente un sesgo político que es utilizado por los sectores dominantes para deslegitimarlos. Inmediatamente el conflicto se hace eco en la sociedad civil, en la opinión pública y los ribetes son distintos a los que podrían caracterizar conflictos fabriles por ejemplo o de sectores de la economía más mercantilizados. Esto adquiere mayor relevancia en aquellas áreas consideradas como “esenciales”, ligadas a los derechos sociales. “Desmercantilización” aparece como un concepto central en esta discusión. Esping Andersen (2000:64), sobre nociones desarrolladas por Polanyi (1992) y Offe (1990), afirma que “(...) *la desmercantilización se podría entender como el conjunto de restricciones económicas, políticas y culturales (incluidas las de carácter ético) que limitan la entrada de bienes en la esfera mercantil, o intervenciones que extraen relaciones sociales de la misma*”.

En la *Gestión Política*, Offe afirma que los sindicatos son organizadores primarios de la relación capital-trabajo, mientras que el Estado es su organizador secundario. ¿Qué pasa cuando es el Estado el empleador? Siguiendo los análisis de Diana Menéndez podemos pensar que “*al menos en primera instancia, el interés del empleador (el Estado) en la negociación no sería inherentemente contradictorio con el de los trabajadores, como se produce en la esfera privada entre el capital y el trabajo. Si bien la relación capital- trabajo se expresa en el Estado, en la medida en que este condensa materialmente esa relación de fuerzas, y varía con ella (Poulantzas, 1980; Thwaites Rey, 2005); aparece en un plano distinto, no es directamente aprehensible, y no está directamente determinada. Existe entonces una mediación, que le otorga un plano de independencia relativa al Estado, del conflicto entre capital y trabajo. En tal sentido, el conflicto altera no sólo el orden social (lo que podría hacer cualquier conflicto social), lo hace en el lugar político por definición.* (Diana Menéndez, 2007:101).

Por su lado Murrillo y Ronconi (2004) plantean que los sindicatos docentes están más expuestos que

los sindicatos del sector privado a variables de tipo político que a otros factores como los de competencia y los ciclos económicos. En síntesis, podemos afirmar que en los sindicatos del sector público, como los docentes por ejemplo, la estabilidad laboral y la baja exposición a la competencia hacen que no pueda extenderse la misma lógica de análisis de la conflictividad que hay en el sector privado. Los sindicatos privados, a diferencia de los públicos, reducen sus intentos de movilización cuando declina el crecimiento económico y aumenta el desempleo por ejemplo.

Por otro lado, respecto a la dimensión político-ideológica hay un aspecto que consideramos fundamental. Hay que aclarar que estas dimensiones las escindimos analíticamente, pero que están estrechamente vinculadas.

Lo que nos interesa problematizar es la doble relación que tienen los trabajadores estatales en tanto defensores de sus intereses y sus derechos y en tanto ser proveedores de bienes socialmente necesarios. Lo que se hace más visible en sectores como salud y educación.

Ya hablamos de la problemática de la inescindibilidad entre patronal y gobierno. Esto significa que la acción o demanda no se orienta en contra del capital (por lo menos de manera directa) y que, si bien todo conflicto social y laboral tiene efectos políticos, estos son más directamente inmediatos en el caso de los estatales. Nos referimos a demandas sectoriales, corporativas. En este sentido, ante la problemática sectorial, el sindicato se encuentra frente al dilema de poner en cuestión un gobierno. Si el gobierno es aliado es un problema, cuestión que ya vimos durante el kirchnerismo y los dilemas de la CTA.

Por otro lado, al haber “un tercero en discordia” generalmente la cuestión toma ribetes políticos, como señalábamos, incidiendo en el campo de la sociedad civil, quien se ve legitimada a opinar o cuestionar/apoyar las medidas sindicales. El problema de la universalización de las demandas, de poder legitimarlas y lograr consensos resulta un problema no menor, incluso cuestiona o pone en entredicho de manera mucho más directa la herramienta histórica de los sectores trabajadores: la huelga. Por eso, la estrategia de los gobiernos, cuando no son afines a los sindicatos (y aun cuando muchas veces dicen serlo) es dilatar los conflictos, por lo que son más extensos generalmente que en el sector privado. La dilatación de los conflictos, la larga duración, la apelación al desgaste y a la campaña de deslegitimación son las formas más comunes que tienen los gobiernos de canalizar los conflictos con el sector estatal. Una de los rasgos que va asumiendo el conflicto social en el macrismo es que este va asumiendo formas más centralizadas, más intensas y duraderas, y cobra mayor grados de nacionalización.

3. SINDICATOS Y ESTADO: UNA COMPLEJA RELACIÓN

Juan Carlos Torre (1989: 13) en su clásico trabajo acerca de los sindicatos y el peronismo, sostenía que habían sido dos los factores estructurales que fortalecieron el poder sindical en los años de

industrialización sustitutiva (desde la década del '40 al '70): por un lado la existencia de un mercado de trabajo relativamente equilibrado con bajos niveles de subempleo y desempleo; y por otro, la cohesión política de la clase obrera dada la estrecha relación entre el voto de los trabajadores urbanos y el voto peronista. En este sentido, la conflictividad laboral y el peso político de los sindicatos estaban condicionados por estos dos factores.

Entonces, desde mediados de la década del cuarenta los sindicatos construyeron lazos estructurales que como constituyeron un sindicalismo que se optó históricamente por dirigir las demandas directamente al Estado, es decir, la acción sindical estuvo estrechamente vinculada al aparato del Estado. De todos modos, no queremos reducir esta particularidad como la única modalidad de estrategia del sindicalismo. Varela, Abal Medina y otros recuperan el papel de las comisiones internas y el sindicalismo de corte clasista y la importancia de estos sectores en las luchas sindicales. Lo que queremos destacar es que el modelo argentino de estructura estatal tiene al Estado como un interlocutor central.

En la década del '90, el perfil político y social de los sindicatos y sus bases fueron profundamente modificados. La dualización del mercado de trabajo entre un sector formal y otro precarizado, la flexibilización del mercado de trabajo y la alianza del partido peronista con su enemigo histórico, (las clases dominantes), provocó rupturas y el cambio de las reglas de juego para el actor sindical.

En este contexto surge la Central de los Trabajadores Argentinos, abiertamente opositores al menemismo. Como señalan Morris y Retamozo las estructuras sindicales que sostuvieron a la CTA desde su nacimiento fueron ATE y CTERA, cuyo desarrollo como organizaciones gremiales es previa y en muchos casos independiente de la CTA.

Queremos detenernos en un elemento que caracteriza a la CTA en relación al Estado. Morris y Retamozo destacan que la centralidad del Estado era doble: por un lado, el Estado es la patronal y actor de negociación pero por otro se le adjudicaba un rol articulador y productor de políticas. Como afirman los autores, *“la cuestión del Estado se instaló desde un inicio en el horizonte de la CTA, a él se atribuyó la responsabilidad de expresar lo público (CTA, 1996: 4) y de representar el interés general de la comunidad (CTA, 1999: 18) como parte constitutiva del horizonte nacional-popular-estadocéntrico”*.

Se definen a sí mismos como portadores de un nuevo modelo sindical, distinto al viejo modelo caracterizado por su dependencia al poder político y su grado de complicidad con el poder económico. Este viejo modelo, ya no era legítimo ni pretendía canalizar las demandas de sus representantes ni defender sus conquistas e intereses. En este sentido la CTA se define como un movimiento político-social cuyos rasgos identitarios eran los siguientes: 1) autonomía sindical; 2) democracia sindical; 3) apertura a otras organizaciones sociales que reflejen la realidad de los cinco millones de argentinos con problemas de empleo; 4) Afiliación directa 5) Revalorización de la ética

gremial. (Abal Medina, 2013); (Morris, 2014); (Retamozo, 2011).

En los '90 el enemigo fue claro, pero a partir de la llegada del kirchnerismo al gobierno planteo otros problemas y dilemas a la Central. Como habíamos señalado anteriormente a partir del nuevo ciclo político y social que se originó entre el 2001 y el 2003, se produjo un proceso creciente de revitalización de las disputas laborales recuperando centralidad en la conflictividad social, las reivindicaciones sindicales. La disminución del desempleo, la reapertura de paritarias y la modificación ciertas regulaciones laborales contribuyeron a la nueva gravitación del actor sindical. Algunos autores denominan a este proceso como de revitalización sindical, cuestión que no problematizaremos pero que da cuenta de la importancia de este actor en la nueva coyuntura.

Por un lado, la mejora en los indicadores de empleo, de crecimiento económico, la apertura de paritarias hizo que el sindicalismo engrosara sus bases y contara con mayor poder estructural y político. Esto explica por qué gran parte del sindicalismo nucleado en la CGT apoyó los primeros gobiernos kirchneristas. En julio del 2004, se reunifica la CGT, con la sola excepción de la CGT de Barrionuevo azul y blanca.

La CTA en un comienzo dio su apoyo, sobre todo ciertos sindicatos como la CTERA hasta su ruptura definitiva en 2010, también gestada por las diferentes posiciones respecto a este conflicto.

Como lo afirman varios autores (Morris, Retamozo, Abal Medina, op cit), el discurso kirchnerista reinstaló sentidos de lo “nacional-popular” y lo estatal fue acompañado por medidas que disputaron un campo político y de significados que la CTA había ayudado a construir. La propuesta de un Estado activo como promesa de inclusión y el establecimiento de fronteras antagónicas con los mismos “enemigos” de la CTA (el neoliberalismo, la dictadura, los organismos internacionales como el FMI, la Corte Suprema de Justicia, etc.) desde un lugar de enunciación privilegiado afectaron el lugar de la CTA.

Además, el kirchnerismo le disputó a la CTA sus aliados históricos (organismos de derechos humanos, intelectuales, artistas) al convertirse en plataforma de reconocimiento para muchos de ellos (Retamozo; 2011)

La reinstalación de un núcleo “nacional-popular” como imaginario político (Muñoz y Retamozo, 2012) y la polarización luego del conflicto por la renta agraria marcaron nuevas fronteras y alineamientos. La relación con el peronismo constituyó un elemento contradictorio y ambiguo, un obstáculo frente a la necesidad de subsumir dicha heterogeneidad ideológica a una meta común (Armellino, 2005; Gurrera, 2008).

4. LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS DEL MACRISMO: ¿RETROCESO?, DEJÁVU ?

La Alianza Cambiemos irrumpió en la escena política ganando las elecciones y dejando atónitos a muchos descreídos en la posibilidad que un partido que se presentaba como “naif”, “apolítico”, sin consignas claras a simple vista y poco federal pudiera acceder al gobierno.

Si las causas de la victoria fueron más que por mérito propio por los límites y errores del kirchnerismo, si fue producto de la saturación y campaña de los medios de comunicación hegemónicos, por las características corporativas y antiperonistas de la clase media, o por esto y otras razones, no es tema de esta ponencia. Consideramos de todos modos que es un debate urgente para pensar como, en Argentina, por primera vez, los grupos dominantes que históricamente lograron acceder al poder por golpes cívico-militares, lograron esta vez hacerlo por las urnas, sin golpes de mercado, ni una crisis económica que por su magnitud lo legitimara o justificase.

Como se afirma en el Documento de trabajo N 15 de CIFRA-FLACSO:

(..) un dilema que parecía irresoluble para los sectores dominantes durante las últimas décadas en la Argentina en que rigió el sistema constitucional fue la ausencia de un partido político propio, ya que la trágica experiencia de la última dictadura les bloqueó definitivamente la posibilidad de contar con un partido militar que mediante la coacción les permitiera imponer sus intereses a los sectores populares.

El cambio de época no es aislado, la oleada neoliberal recorre Europa y Latinoamérica. Es bajo estas coordenadas que debemos pensar el rumbo económico y político del macrismo. Los primeros y acelerados pasos de la nueva política económica constatan la presencia de un fuerte shock ortodoxo de carácter neoliberal que intenta alterar el rumbo de las políticas estatales. Nos preguntamos si estamos ante el intento de estructurar cambios e imponer un nuevo patrón de acumulación de capital que profundice los rasgos más regresivos que se arrastran desde la dictadura y que revierta aquellos elementos rupturistas que instauró el modelo anterior.

El diagnóstico inicial no dista del decálogo neoliberal menemista: básicamente se asienta en que los problemas macroeconómicos son producto de los excesos en la intervención estatal, la sobre expansión del consumo interno en base a los altos salarios de los trabajadores y a un elevado gasto público. En este sentido, el ajuste en el proceso económico, se puede visualizar desde la implementación de las primeras medidas del gobierno. De acuerdo al documento n°15 de Cifra-Flacso y el Observatorio CTA, podemos enumerar las principales medidas que rompen con las regularidades económicas del modelo anterior:

- devaluación del 40% de la moneda:
- reducción o eliminación de retenciones a las exportaciones:

- ascenso en las tasas de interés,
- la liberalización en el movimiento de capitales;
- la apertura económica (asimétrica);
- la desregulación de ciertos mercados (sector financiero, hidrocarburos –sólo la transferencia de la autoridad de aplicación-, aseguradoras, exportaciones agrícolas),
- el endeudamiento externo,
- aumentos de tarifas de los servicios públicos y combustibles;
- el cierre de empresas (especialmente PyMEs).

Respecto a los avances contra el trabajo, las principales políticas adoptadas son: despidos masivos en la esfera estatal; reducción de los salarios reales; anuncios de reducción del gasto y el déficit fiscal; política de contención a las paritarias y despidos y suspensiones en la esfera privada.

Las fuentes consultadas (documentos de CIFRA, CEPA y CTA), más allá de algunas variantes, acuerdan en destacar que el esquema de “ganadores y perdedores” del 2016 propone una nueva situación estructural. Los sectores que más trabajo aportaron durante los últimos años empiezan a reducir su peso en la economía, y los grupos tradicionales ligados a ventajas comparativas del sector primario se vuelven los protagonistas.

Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en un informe titulado *El nuevo fracaso de la teoría del derrame. Un análisis de las ramas ganadoras y perdedoras de la etapa 2015-2016*, demuestran que el campo fue el que consiguió ganar mayor participación en la economía en el primer año de gestión de Mauricio Macri.

Las ramas ganadoras de programa ortodoxo del Gobierno se quedaron con parte de los ingresos que anteriormente recibían otras actividades (construcción e industria manufacturera, en particular). A la vez se apropiaron sensiblemente de los ingresos de los trabajadores en un contexto de retracción de productiva”. Afirman que “la expansión de las actividades beneficiadas por el macrismo no ha redundado en un beneficio para el conjunto de la sociedad, sino que ha significado estrictamente un aumento de la renta extraordinaria apropiada por los grupos tradicionales de poder económico”

Los

bancos pasaron de explicar del 4,1 al 4,5 por ciento del PBI, un alza de 0,4 puntos porcentuales, al tiempo que las eléctricas lo hicieron del 1,4 al 1,6 (+0,2 puntos porcentuales) y las mineras del 4,0 al 4,1 (+0,1). Dice el informe,

De acuerdo a datos relevados por el diario Pagina 12, durante el año 2016 los indicadores oficiales mostraron que durante la gestión de Cambiemos se destruyeron 134 mil puestos de trabajo y que el salario real se redujo alrededor de un 10 por ciento, números que empeoran en el terreno de los

trabajadores no registrados.

En 2016 la desocupación pasó desde el 6,6 al 9,3 por ciento entre el segundo trimestre de 2015 y 2016. La consultora privada Tendencias Económicas calculó que hasta octubre del 2016, hubo 171.801 despidos, 7,9 veces el número de 2015 y que las suspensiones llegaron a 106.848 trabajadores (una suba del 89 por ciento). Por su parte, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) considera que desde que asumió el macrismo los despidos y suspensiones acumulados llegan hasta el 2016 a 208 mil de los cuales, 137.483 casos corresponden al sector privado y 70.597 a trabajadores del Estado (Página 12 13/10/2016). En tanto, ATE sostiene que en lo durante el 2016 fueron despedidos 11 mil trabajadores del Estado nacional y 50 mil en las provincias y municipios de todo el país.

Para 2017 los resultados no son alentadores, se visualiza un crecimiento en la cantidad de despidos y suspensiones. Citado por el diario Pagina 12, el informe de la consultora Tendencias sostiene que en marzo los despidos afectaron a 61.249 trabajadores, que en su mayoría se desempeñaban en pequeñas y medianas empresas, lo que representó un aumento que más que triplica la cifra de igual mes del año pasado. Como resultado de esta política de ajuste y desmantelamiento de la industria, que lleva a cabo el gobierno de Cambiemos, el número de trabajadores en huelga por reclamo de sus puestos o condiciones laborales alcanzó a 11.143.169 personas, según la misma consultora.

En cuanto a los datos de pobreza e indigencia el informe de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), el índice de pobreza en el país aumentó más de 5 puntos porcentuales hasta llegar al 34,5 por ciento en el primer trimestre de 2016, lo que implica 13 millones de personas y que 350 mil personas cayeron en situación de indigencia en los primeros tres meses del año 2016, llegando a 2,3 millones.

Todas estas políticas tienen un claro intento desde el Estado, de cambiar la relación entre el capital y el trabajo, habilitando una monumental transferencia de ingresos desde los sectores trabajadores hacia el capital, y erosionando las bases materiales y subjetivas de los trabajadores a partir de la reducción del salario real, la desocupación, las suspensiones y la represión de la protesta social como estrategias de disciplinamiento de la clase trabajadora.

El proceso de despidos comenzó por la expulsión de trabajadores del sector público, que hacia mediados de enero supera los 20 mil agentes estatales, de acuerdo con los relevamientos de asociaciones gremiales y sociales. La mayor parte de los despidos se dio aprovechando la existencia de importantes niveles de precariedad contractual en el empleo público, asentando principalmente en programas específicos ligados a políticas públicas y sociales, además de desarticulando áreas y programas enteros en distintas dependencias estatales, despidiendo incluso a planta estable.

Es folclórico, o parte del sentido común, calificar al empleado público de haragán, de poco afecto

al trabajo e ineficiente. Las privatizaciones de los años '90 fueron legitimadas, entre otras cosas, por este arsenal de calificativos. Sumado a la metáfora gastronómica del ex ministro de economía Prat Gay, aduciendo que los empleados estatales nombrados por el gobierno anterior eran todos "ñoquis"; el descalificativo mayor para denigrar al empleado estatal fue el de acusarlo de trabajador militante del kirchnerismo. Bajo el eufemismo de "grasa militante" quedó claro que la triada: trabajador estatal/ ñoqui/ kirchnerista, se erigió como el caballito de batalla para justificar el ajuste en el sector público: *"Los ñoquis son parte de la herencia. Encontramos un Estado lleno de militantes. Queremos que al Estado no le sobre la grasa de los militantes"* (Prat Gay).

Es interesante aportar datos que desmientan este supuesto elefantismo ocioso del sector estatal consolidado en el gobierno anterior. Según los datos aportados por el documento citado anteriormente se puede afirmar que ...

"cabe enfatizar que si se considera el período en conjunto (2003-2014) no hubo ningún crecimiento explosivo del empleo estatal, sino que al final del mismo éste representaba el 20,3% de la ocupación y el privado el 79,7% que es similar a sus respectivas participaciones en 2003, de allí que sus tasas de crecimiento anual sean también semejantes. Más aún, dado que entre 2003 y 2014 la tasa de crecimiento acumulativa del PIB fue 5,4%, el empleo estatal habría aumentado en una proporción similar al producto. Además, creció significativamente menos que la recaudación fiscal en términos reales²⁷, de la cual surgen los recursos para el pago de los salarios estatales. En el mismo período considerado, los recursos tributarios totales nacionales se expandieron a una tasa anual acumulativa de 10,4%, que prácticamente duplica a la del empleo".

Como demuestran los documentos de CIFRA y CTA, la misma lógica se trasladó también al sector privado y desde el Gobierno Nacional se insistió en la necesidad de facilitar (y por ende abaratar) los mecanismos de contratación y despido de los trabajadores. "La versión más acabada y brutal de este discurso fue enunciado por el Secretario de Empleo, Miguel Ángel Ponte, quien en enero de 2017 señaló que: *"contratar y despedir debería ser natural como comer y descomer"*.

El ataque al sector trabajo también se concretizó en un ataque discursivo y mediático a las estructuras sindicales calificándolas de irresponsables, en algunos casos de mafiosas. Justamente, como explican en el documento uno de los obstáculos que el gobierno tiene para poder avanzar sobre el trabajo es la existencia de una estructura de negociación colectiva centralizada, sumada a la discusión anual sobre las paritarias.

Justamente uno de los objetivos de estas políticas es redefinir la naturaleza del Estado, lo que va a incidir en las estrategias, formas de acción colectiva y organización de los sectores trabajadores en general y de los sindicatos estatales en particular. Avanzar sobre las regulaciones y derechos laborales es imperioso para los sectores del capital, y las políticas y los sentidos de la acción de gobierno van orientadas a lograr ese objetivo. Como se afirma en el documento de CIFRA

"la instauración de un nuevo modelo de acumulación requiere de una modificación de la forma del Estado que altere las características de la intervención económica que se habían desplegado en el marco de las gestiones kirchneristas" (CIFRA: 19).

Las reformas fueron llevadas a cabo con la complicidad o por lo menos pasividad del sindicalismo burocrático. La CGT se reunificó en Agosto de 2016 formando un triunvirato, pero recién quince meses después convocó a un paro general a causa de la presión de las bases trabajadoras. La postura de la CGT osciló entre expectante y paciente con discursos más radicalizados expresados en Moyano hijo (Pablo) y Plaini de la Anses, hasta la cooperación y adhesión al partido gobernante bajo el mando del secretario de UATRE, el Momo Venegas. Es muy reciente para sacar conclusiones acerca de las estrategias del sindicalismo, pero podemos afirmar que fueron los sectores estatales los que rápidamente salieron a movilizarse y organizarse. Esto nos lleva a seguir pensando en la naturaleza del sindicalismo estatal ya que creemos que las lógicas y dificultades no son directamente asimilables al sindicalismo en el sector privado.

Antes de continuar con las principales medidas económicas del macrismo consideramos necesario dar cuenta de algunos rasgos centrales del modelo anterior, para poder visualizar las rupturas más significativas. Esto es importante para poder comprender el escenario abierto a partir del triunfo de la Alianza Cambiemos y los desafíos que se le presentan al sindicalismo en esta nueva coyuntura.

En términos del modelo de acumulación podemos esbozar una periodización a partir de las diferentes lecturas realizadas. El primer periodo es el abierto a partir del 2002 (cuyo origen es la crisis del 2001) hasta el 2007 o 2008 que podemos denominar de recomposición capitalista. El sindicalismo en términos generales, tanto la CGT moyanista como la CTA acompañaron este proceso dando señales de ciertos grados de apoyo al gobierno.

Señala Basualdo (2001:123) que, a partir de 2003 “se abre (en el país), una etapa en la cual los distintos estratos sociales y fracciones del capital intentan definir un nuevo patrón de acumulación de capital”. Varesi (2013) identifica dos líneas de acción consideradas centrales, una de corte económico, que refiere a la decisión de lograr el mayor crecimiento económico anual posible sobre la base de la expansión de la economía real, o sea la producción de bienes y servicios, para superar la crisis, disminuir la desocupación y mejorar la distribución de los ingresos. Crecimiento que fue posible debido a la presencia de un contexto internacional que permitía revertir el deterioro secular de los términos de intercambio; el canje de la deuda externa y la expansión de la economía real.

La otra línea de carácter político, consistió en “la búsqueda por lograr la hegemonía política en su forma clásica, a través de otorgar beneficios a los distintos sectores subalternos plasmando una creciente inclusión política y social de los sectores subalternos” (Basualdo, 2011: 140). Los estudios disponibles destacan para el período medidas tales como:

- 1) Política de promoción industrial reconociendo como destinatarios privilegiados a diversos grupos económicos locales;
- 2) Enfrentamiento político con los acreedores externos y los Organismos Internacionales de Crédito;
- 3) Rechazo a las auditorías y condicionalidades del FMI sobre la política económica nacional.
- 4) Política de aumentos del salario mínimo, primero mediante Decretos y luego por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil;
- 5) El retorno a las negociaciones salariales mediante paritarias
- 6) Se mantuvo una estructura tributaria regresiva basada principalmente en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que es un impuesto al consumo, recae sobre el consumidor final y posee mayor peso sobre los ingresos de los sectores que menos recursos perciben. Esta continuidad del modelo regresivo “marca límites de la acción estatal en el primer período para transformar las condiciones de vida de los agentes subalternos” (Varesi, 2013: 206)

Basualdo (2011), Varesi (2013), Grijera (2013) identifican al período de gobierno de Néstor Kirchner (2002-2007) como una administración que configuró un nuevo modelo y un nuevo cuadro de relaciones de fuerza en el cual una fracción productivo-exportadora.

Finalizado el mandato de Néstor Kirchner le sucede su esposa, Cristina Fernández que gobierna en el período 2008-2011 y es reelegida por amplia mayoría para un segundo mandato (2012-2015).

Una de las primeras medidas del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue poner en marcha un sistema de retenciones móviles para las exportaciones sojeras en virtud del incremento inusitado del precio internacional de la soja. Enfrentaron esta medida no sólo los sectores agrarios latifundistas de la Sociedad Rural, sino otras entidades que históricamente se habían conformado para defender los intereses de medianos y pequeños productores y de las cooperativas agrarias.

En marzo de 2008 estas organizaciones aglutinadas en la denominada “Mesa de Enlace”, ponen en marcha un conflicto que duró cuatro meses ocupando las rutas del país y provocando desabastecimiento de productos vitales en nombre de la “Crisis del campo”.¹⁰ La política expansiva del primer período también muestra sus dificultades en un contexto de crisis mundial con epicentro en los países centrales.

A partir de 2008, frente a la pérdida de adhesiones al interior de la clase dominante y la conformación del alineamiento de derecha que ganará las elecciones de diputados y senadores en 2009, el kirchnerismo profundiza la estrategia de confrontación contra sus adversarios y procura recostarse más sobre los sectores productivos aliados y sobre las clases subalternas dando lugar a un “Proceso de Radicalización Progresista” (Varesi, op cit: 214). En este proceso las políticas

sociales jugarán un papel central, en especial la estatización de los Fondos de Jubilación y la Asignación Universal por Hijo (AUH) que configuraron medidas progresivas de promoción de los sectores más castigados por el programa neoliberal.

Otra de las medidas fue la sanción de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 (Ley de medios), además del reposicionamiento del Estado en el control de los recursos estratégicos para el desarrollo del país con la expropiación del 51% de las acciones de YPF y la reimplantación de la regulación estatal en la producción, refinanciación y comercialización de hidrocarburos.

Varesi (ibid) analiza la profundización de la estrategia oficial de recuperar la confrontación en las calles y en las plazas para dar cauce a las políticas públicas. Sostiene que la confrontación puede ser analizada como una estrategia de acumulación primordial en la reacomodación de las fuerzas dominantes y subalternas. En cambio, Piva y Bonnet no plantean este viraje en términos de radicalización progresista sino que hablan de déficit de institucionalización lo que significa que el éxito del gobierno en polarizar el espacio político en términos de oposición k y anti k oculta y expresa al mismo tiempo la dificultad para la constitución de una hegemonía que brinde estabilidad a la dominación (Piva, :186)

A partir del año 2011 y 2012, comienzan a manifestarse los límites de este modelo de crecimiento, y se comienzan a gestar rupturas con los sectores de apoyo de este modelo, por ejemplo, el moyanismo. También los datos sobre conflicto social muestran un aumento en la conflictividad en el periodo abierto en el 2012, con paros generales (cinco cada diez meses según los datos de Nueva Mayoría) y varias movilizaciones fundamentalmente por el tema ganancias y por aumentos salariales.

Piva y Bonnet hablan del kirchnerismo como keynesianismo trunco, en la medida en que los intentos de traducir la presión obrera y popular en expansión de la demanda originan inflación y desequilibrio en el desenvolvimiento de la acumulación se originan nuevos problemas de coherencia en el aparato del estado (Piva, . Estos autores afirman que tensión entre las políticas económicas y la acumulación capitalista le impuso restricciones y límites al kirchnerismo, como por ejemplo la dualización estructural lo que limitó la intervención específicamente política del estado durante la posconvertibilidad.

A partir del 2012 la conflictividad social y el aumento de movilizaciones y paros comandadas por grupos de izquierda y por las cúpulas sindicales de la CGT representada por Moyano y Barrionuevo y la CTA representada por Micheli.

5. CARACTERIZACIÓN DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO: PERFILES PRODUCTIVOS SEGÚN SUS REGIONES

La provincia de Río Negro cuenta con cuatro subregiones que dan cuenta de su nivel de diversificación productiva y permiten comprender muchas de sus particularidades. Las regiones, según sus perfiles regionales son las siguientes:

El Alto Valle: abarca a los 700 o 750 km² que se extienden por el departamento General Roca (Río Negro) y del departamento Confluencia (Neuquén). En esta región, el principal factor productivo históricamente lo constituye la explotación frutícola. Sus ciudades principales son: General Roca, Cipolletti y Villa Regina. Los actores sociales principales son justamente aquellos vinculados con la fruticultura.

La Zona Atlántica: tiene como ciudades principales a San Antonio Oeste, Viedma y Las Grutas. En dicha zona, se concentran actividades pesqueras (puerto de San Antonio Oeste). Por otro lado, hay desarrollo turístico que se ubica en el balneario Las Grutas. En la ciudad capital (Viedma), la actividad principal está vinculada a la burocracia estatal y al gobierno. Aquí se ejecuta en la actualidad aproximadamente 25% del gasto público siendo el 80% de esa suma destinada a salarios.

La Zona cordillerana: en ella se desarrollan actividades ligadas al turismo. Hotelería, gastronomía y servicios turísticos se reparten casi la mitad del movimiento económico; el resto de la demanda laboral es el sector público.

La Línea Sur: su actividad más importante es la cría de ganado ovino y bovino. Actualmente, en esta zona se encuentran los mayores índices de pobreza, analfabetismo y falta de cobertura de salud de la provincia. La región de la meseta no logra un desarrollo especializado en una actividad, derivando en un proceso de declinación demográfica.

Entonces la provincia de Río Negro se constituye como un territorio donde se articulan diversas regiones económicas. Es sobre esta distribución que se superpone un mapa de poder político cuyos centros están directamente relacionados con la estructura productiva diversificada que tiene la provincia. Viedma es el centro administrativo. El Alto Valle constituye la región agroindustrial ligada al mercado de manzanas y peras para la exportación. La Zona Sur orientada a la ganadería extensiva y Bariloche como centro turístico internacional (Maqueda y Matus, 2012; Tagliani, 2011).

6. LA CTA EN LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

En sus inicios la Central surge en la Patagonia Norte como una central regional, que incluye a las provincias de Río Negro y Neuquén. En esos primeros años los dirigentes de los sindicatos que estaban conformando la Central deciden trabajar en conjunto en lugar de provincia por provincia. De acuerdo a lo expresado por Julio Fuentes, quien fue el primer secretario general de la

organización en la región, el 9 de julio de 1993 se realiza una reunión donde se conforma en primer lugar, el Congreso. El Congreso de trabajadores de Río Negro y Neuquén. Entre las organizaciones que participan y se integran en este marco, podemos mencionar al Sindicato de la fruta (que, como sindicato, también nucleaba a ambas provincias), el sindicato docente Unter (Unión de los Trabajadores de la Educación de Río Negro), ATEN (Asociación de los Trabajadores de la Educación de Neuquén), los trabajadores judiciales de ambas provincias, los trabajadores municipales de Bariloche, entre otras organizaciones.

Como mencionábamos anteriormente, uno de los rasgos que distingue a la CTA como Central de Trabajadores, está relacionado a la posibilidad de afiliación directa y que todos los trabajadores (estén ocupados o no) puedan afiliarse. Así lo comentaba el Secretario General de ATE de la Seccional Alto Valle Este (y Secretario General de la CTA Fiske Menuco):

La CTA tiene dos características porque es la primer Central de Trabajadores y una de las únicas en el mundo que permite la afiliación directa. Están afiliados a la CTA todos los trabajadores de los sindicatos de base o las organizaciones sociales de base, pero también aquellos que no pertenecen a ninguna organización y desean afiliarse de forma directa

Si claro. Se vio puntualmente encabezado por los compañeros de Unter, que era el sector más ligado al pensamiento que había acompañar al gobierno en su proceso. Yo no comparto, pero no es inválido, es un planteo que es un planteo político y por otro lado el secretario general de ATE con el planteo de la autonomía y que necesitábamos consolidarnos como un espacio autónomo. Y la realidad nos viene dando la razón que necesitamos tener una central que sea autónoma de las patronales.

En relación a su base social, la Central está conformada en la Provincia de Río Negro actualmente principal y activamente por ATE, está también la Unter, Sitrajur (el sindicato de judiciales) y después un número de organizaciones sociales y de desocupados. La CTA coordina fuertemente la multisectorial donde participan organizaciones políticas y sociales, pero orgánicamente hasta el momento en la provincia de Río Negro la única organización social que está afiliada formalmente es una organización de desocupados que se llama Organización de Desocupados en Lucha, y está en toda la provincia. En cuanto al impacto de la dinámica nacional sobre la dinámica provincial, recuperamos lo señalado por Julio Fuentes antes la pregunta si la fragmentación a nivel nacional había tenido consecuencias en el plano provincial.

7. LA CTA EN EL NUEVO ESCENARIO: DESAFÍOS Y PROYECCIONES

En relación a los nuevos desafíos y la proyección a futuro que se abren a partir de la coyuntura actual, es importante recuperar algunas reflexiones de los dirigentes entrevistados, tanto pensando

en el plano nacional, como en el provincial. En la entrevista realizada a mediados del año 2016, Julio Gambina plantea cómo a partir de la irrupción del macrismo se generan de alguna manera las condiciones para comenzar a confluir en la lucha ambas Centrales, inclusive con aquellas organizaciones ligadas a la CGT, aunque no hay en su reflexión referencias a la reunificación.

En este gobierno de Macri, el movimiento popular más importante contra el macrismo ha sido el paro general convocado por cuatro centrales. Se había dicho por cinco, pero la CGT liderada por Barrionuevo se bajó. Entonces la acción tiene en este momento la curiosidad que la CGT de Caló y la CTA de Yasky (o la CTA de los trabajadores), que no adherían a los paros generales en la etapa del gobierno kirchnerista, en la etapa del gobierno de Macri sí protagonizan esas luchas. Por lo tanto, el gobierno de Macri lo que ha generado es una ampliación de la unidad de acción de las centrales sindicales en la Argentina.

Esto ha generado debates en la CTA, porque en la CTA autónoma actual hay algunas organizaciones, dirigentes que no están de acuerdo en que se transite una unidad de acción con organizaciones que hasta hace muy poquito no eran protagonistas de la lucha popular. En tal caso se abren nuevos debates, se generan nuevas discusiones; pero yo me animaría a decir que el primer impacto orgánico es en la época del kirchnerismo la fractura de la CTA y en el tiempo del macrismo se han generado condiciones para confluir. Es más, después del paro general y ante la sanción de la ley antidespidos, ni bien el gobierno vetó la ley antidespidos, las dos CTA junto con algunos sindicatos de la CGT y otras organizaciones convocamos a un acto multitudinario en plaza de mayo (no recuerdo ahora las fechas). Con lo cual durante el gobierno de Macri se han generado condiciones de unidad de acción para enfrentar las políticas de ajuste, los despidos, el tarifazo, etc.

Julio Fuentes, por su parte, se identifica con un sector minoritario que pretende generar el debate y abrir a la posibilidad de construir algo nuevo, que no necesariamente la unificación lograría resolver las diferencias, ya que desde su perspectiva el sindicalismo argentino en general y la CTA en particular, deben realizar una lectura de la derrota del campo popular y construir en función de ese análisis.

Bueno yo opino que hemos tenido una derrota en términos políticos porque la oligarquía, las cámaras patronales han logrado no ya poner un gerente de sus intereses, sino que han puesto uno de ellos. Macri es uno de ellos, no es un político que termina coqueteando con los más ricos y gobernando para ellos. Macri es de lo más ricos, él es uno de ellos.

Era alguien que sabemos perfectamente de dónde venía y venía además ejerciendo un gobierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos períodos. Esa derrota tiene que tener explicaciones. Yo soy de los que cree que hay que debatir hoy más que nunca para no volver a cometer los mismos errores, digo debatir qué nos pasó

Yo creo que lo que se está viviendo dentro del sindicalismo argentino trasciende lo que nosotros conocimos como CTA de los trabajadores, CTA autónoma, CGT del triunvirato. Hay un grupo (no muy importante, no te voy a andar engañando), no es mayoritario ni nada que se le parezca, pero hay un grupo interesante de organizaciones, de dirigentes en distintos niveles (niveles locales, niveles provinciales, nivel nacional) que consideran que el sindicalismo tiene que re mirarse, que no es cuestión de que ahora porque el que está es Macri hagamos un pegote. Una cosa es la unidad en la acción, bueno si vienen a agredirnos, si vienen por nuestro salario podemos unir todos los pedazos que tenemos y dar una batalla. Dar una batalla de resistencia. Pero en el planteo de la ofensiva, nosotros creemos que hay que abrir una discusión más grande, que nos trasciende inclusive a los sindicatos que hoy estamos en cualquiera de las dos CTA...

El sindicalismo, hoy, tenemos también que reconocer que nosotros no somos todo el movimiento obrero. Nosotros somos una parte, importante. Yo creo que la mejor herramienta que tiene el movimiento obrero son los sindicatos, pero es una parte. Porque la mitad prácticamente de la clase trabajadora está en negro o sea que no está dentro del sindicato.

...todos los gobernadores o la gran mayoría (incluidos los intendentes, por lo menos aquí en la provincia de Río Negro), se están acoplando a esa política de ajuste que está llevando adelante el gobierno nacional, independientemente de los colores políticos que tengan.

Es una crítica que le hacemos a la conducción nacional, son posiciones que vienen discutiendo los dirigentes a nivel nacional, tanto en el caso de Yasky y Pablo Micheli, pero que esa discusión no se ha dado en el ámbito territorial, en los espacios democráticos de base. Por lo cual, si esa unidad surge de algún Congreso o de algún espacio participativo donde podamos todos los representantes de la CTA tener participación, será bienvenido.

En cuanto a la realidad específica de Río Negro, el dirigente local sostiene la importancia de respetar la democracia de base ante cualquier eventual reunificación, y nos señala la particularidad de la relación con el gobierno provincial actual.

El Estado por lo general intenta no reconocernos, por eso es también que se ha utilizado siempre la lucha activa como una forma de generar, o de presionar para que se generen esos espacios de diálogo. No ha habido en esta provincia, en toda la historia de la CTA un espacio formal donde la CTA pueda canalizar, a través de un diálogo constante una mesa de negociación, una mesa de diálogo con autoridades de los gobiernos tanto provincial como municipales.

Estamos en una provincia que tiene una ley de la función pública por la que en el Estado solamente debate un supuesto sindicato mayoritario sin darle participación al resto de los gremios sin darle importancia a la cantidad de representatividad que tenga. Lo que muestra claramente un espíritu totalmente antidemocrático, siendo una de las pocas provincias que no tienen paritarias legales constituidas en las que participen todas las entidades representantes de los trabajadores de la provincia. Ese mismo marco legal lo acentúa el gobierno provincial a partir del propio discurso

El otro sindicato es UPCN. ATE tiene cerca de 9800 afiliados, en una curva de crecimiento en los últimos años y UPCN tiene declarados cerca de 11500 afiliados, lo que muestra que aunque pueda ser considerado ese número real, no es una diferencia tal que pueda hacer razonable que el gobierno solamente se sienta a negociar con una sola entidad gremial y esa posición es lo que termina mostrando el nivel de conflictividad que hay en todos los sectores estatales de la provincia en los últimos años y que en vez de ir apaciguándose, van creciendo día a día.

8. CONCLUSIONES

Más que arribar a certezas, esta primera aproximación nos abre un abanico de abordajes posibles y diferentes. En primer lugar, recuperamos como un aspecto a seguir desarrollando y profundizando, el abordaje teórico para reflexionar sobre la necesidad de abordar lo estatal, desde una lógica particular.

En segundo lugar, este abordaje teórico también nos demandará un esfuerzo metodológico para poder estudiar esa relación entre el Estado y los sindicatos, y específicamente la relación de la CTA con el Estado, tanto en el plano nacional y provincial.

Por último, es fundamental lograr arribar a estos conocimientos para así contribuir a delinear estrategias y líneas de acción en el plano estatal que contribuyan a poner límites a cualquier ofensiva que intente avanzar sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

BIBLIOGRAFIA

1. BIBLIOGRAFÍA

Abal Medina et al (2013). La forma sindical en Debata en Latinoamerica. Buenos Aires. Nueva Trilce. **Arceo, N. et al (2010) La economía argentina de la posconvertibilidad en tiempos de crisis mundial. Buenos Aires. Atuel.**

Bonnet, A y Piva, A. *Tiempos de recomposición. La dinámica de la política argentina durante la década 2002-2013.* XI Congreso Nacional de Ciencia Política, organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político y la Universidad Nacional de Entre Ríos, Paraná, 17 al 20 de julio de 2013.

Bonnet, A. y Piva, A. (2013) Un análisis de los cambios en las formas de estado en la posconvertibilidad. En Grigera, J. (comp) *Argentina después de la posconvertibilidad (2002-2011)*. 1ª ed. Buenos Aires. Imago Mundi.

Chiappe, M y Spaltenberg, R. Una aproximación a los conflictos laborales del sector docente en argentina durante el período 2006-2009. Subsecretaria de Programación Técnica y Estudios Laborales. Dirección de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. (SSPTyEL del MTE y SS)

Diana Menendez, N. (2007) *La representación sindical en el Estado: los casos de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN)*. Tesis de Maestría. Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires

Eiff, D. (2015) La experiencia de lo político. Dimensiones en el pensar de Claude Lefort. http://cienciassociales.edu.uy/institutodecienciapolitica/wp-content/uploads/sites/4/2015/12/Leonardo_Daniel_Eiff.pdf

Modonesi, M. (2010) El principio antagonista. Marxismo y acción política. Capítulo Entre Subalternidad, antagonismo y autonomía. Mexico: Itaca y UNAM.

_____ (2010) “Subalternidad, antagonismo, autonomía. Marxismo y subjetivación política”. Disponible en: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsd/collect/clacso/index/assoc/D2985.dir/modonessi2.pdf>

Murillo, y Ronconi. (2002) Efecto económico del sindicalismo: el caso de la educación en argentina Centro de Estudios para el Desarrollo Institucional Documento 79.

<http://www.iadb.org/RES/index.cfm>

- Piva, Adrián (2009). El desacople entre los ciclos del conflicto obrero y la acción de las cúpulas sindicales en Argentina (1989-2001). *XII Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia*. Departamento de Historia, Facultad de Humanidades y Centro Regional Universitario Bariloche. Universidad Nacional del Comahue, San Carlos de Bariloche
- Silver, B. (2005). Introducción. En *Fuerzas del trabajo. Los movimientos obreros y la globalización desde 1880* (pp. 15-53). Madrid: Akal.
- Tagliani, P. (2015) *Economía del desarrollo regional: provincia de Río Negro 1880-2010*. 1ª ed. Vicente Lopez. La Colmena.
- Thompson, E.P. (1979). “La economía moral de la multitud en la Inglaterra del siglo XVIII”. En *Tradición, Revuelta y Conciencia de Clase* (pp. 62-134). Barcelona: Crítica. <https://problemathistoriograficosadebate.files.wordpress.com/2014/10/228938883-thompson-la-economia-moral-de-la-multitud.pdf>
- Varesí, G. (2013) “Modelo de acumulación, dinámica política y clases sociales en la Argentina posconvertibilidad”. En Grigera, J. (comp) *Argentina después de la posconvertibilidad (2002-2011)*. 1ª ed. Buenos Aires. Imago Mundi.

FUENTES CONSULTADAS:

Informe del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad social “La conflictividad laboral durante 2016

NUEVA MAYORIA.DATOS SOBRE CONFLICTIVIDAD 1980-2016

DOCUMENTO N 15 CIFRA-FLACSO

Informe del Observatorio del Derecho Social de la CTA “Disparen contra el trabajo (y contra los trabajadores). Conflictos laborales, negociación colectiva y mercado de trabajo – Informe Anual 2016”.

Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en un informe titulado “El nuevo fracaso de la teoría del derrame. Un análisis de las ramas ganadoras y perdedoras de la etapa 2015-2016”

Página 12 8 enero 2017-06-01, 13 de octubre de 2016 y 19 de enero de 2017